

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO  
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021)

<b>JUEZ MEDIO DE CONTROL:</b>	Magda Cristina Castañeda Parra REPARACIÓN DIRECTA
<b>RADICACIÓN No.:</b>	<b>110013343064-2020-00139-00</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	Jhon Fredy Sosa Castro y otros
<b>DEMANDADO:</b>	Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
<b>ASUNTO</b>	RECHAZA DEMANDA

REPARACIÓN DIRECTA  
RECHAZA DEMANDA

I.- ANTECEDENTES

Correspondió a este Despacho la demanda de reparación directa instaurada por los señores **JHON FREDY SOSA CASTRO, JOSÉ OSMAR SOSA CASTRO, JHONATAN DAVID SOSA BRAVO y ESPERANZA MARTÍNEZ LOZANO** en contra de la **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL**, con la finalidad que se les declare administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor **Jhon Fredy Sosa Castro**, desde el día cinco (5) de agosto de 2009, hasta el día dos (2) de marzo de 2010.

Para resolver se hacen las siguientes:

II.-CONSIDERACIONES

En este caso se demandó por la privación injusta de la libertad del señor Jhon Fredy Sosa Castro, desde el día cinco (5) de agosto de 2009, hasta el día dos (2) de marzo de 2010, como consecuencia del proceso penal con radicación No. 252960 00397 2009 80204, seguido en su contra por los delitos de Desaparición Forzada Agravada y Hurto Calificado y Agravado.

Según se mencionó en los hechos de la demanda y conforme a la material probatorio aportado, se evidencia que dentro del proceso penal 252960 00397 2009 80204, seguido en contra del señor Jhon Fredy Sosa castro, el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUNDINAMARCA profirió sentencia absolutoria el día 24 de agosto de 2017, confirmada por la SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, mediante proveído del 3 de mayo de 2018, la que

quedó ejecutoriada el día **10 de mayo de 2018**, según constancia contenida en el CD visible a folio 12 del plenario.

Respecto de la caducidad en acciones de reparación directa, el artículo 164, numeral 2.-, literal i) del C.P.A.C.A. establece lo siguiente:

*“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”* (El despacho resalta).

El Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha establecido que la contabilización del término de caducidad, en estos casos, empieza a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, **de la sentencia absolutoria** o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra; momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, pues es sólo a partir de ese momento, que es posible calificar de injusta la detención.

Anterior a este momento, la detención no adquiere tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal<sup>1</sup>. Es decir, el daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de ella, la cual deviene como consecuencia de la decisión penal que así lo determine.

En ese orden de ideas, el término de la caducidad deberá contarse a partir **del 11 de mayo de 2018**, venciendo los dos (2) años el **11 de mayo de 2020**, plazo límite que tenía la parte actora para formular la demanda y solicitar la conciliación extrajudicial en derecho.

No obstante que la celebración de audiencia de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad desde su presentación hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias respectivas, o hasta que transcurran tres (3) meses, lo que ocurra primera,<sup>2</sup> lo cierto es que en el presente asunto, dicha solicitud no logró suspender el término, por cuanto se radicó el **21 de julio de 2020**, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Si la demanda se presentó el **21 de septiembre de 2020**, (fl. 15 ), se incoó el medio de control por fuera del término legal para hacerlo.

Por lo anterior, se declarará de oficio la caducidad del medio de control. Por lo tanto, se rechazará la demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018), bajo el radicado No. 05001-23-31-000-2006-02041-01(49033). CP : María Adriana Marín.

<sup>2</sup> Artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

En consecuencia, el Despacho,

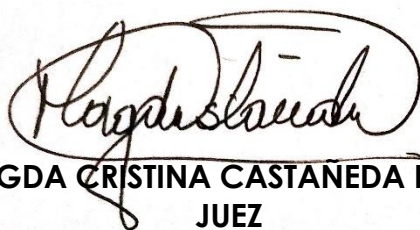
### RESUELVE

**PRIMERO: Rechazar** por caducidad la demanda de reparación directa presentada por los señores **Jhon Fredy Sosa Castro, José Osmar Sosa Castro, Jhonatan David Sosa Bravo y Esperanza Martínez Lozano** en contra de **la Nación- Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial**.

**SEGUNDO: Notifíquese** la presente decisión por correo electrónico de la apoderada judicial de la parte demandante, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 806 de 2020.

**TERCERO:** Por Secretaría déjense las constancias de rigor.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



**MAGDA CRISTINA CASTANEDA PARRA**  
**JUEZ**

Ms